**SÉPTIMO INFORME ESTADO DE LA REGIÓN**

**Comunicados de prensa**

[Séptimo Informe Estado de la Región destaca oportunidades para fortalecer la democracia y el desarrollo humano sostenible 2](#_Toc208396563)

[Alta dependencia de combustibles fósiles y falta de inversión impiden aprovechar el alto potencial de energías renovables en la región CARD 5](#_Toc208396564)

[Centroamérica y República Dominicana se enfrentan al reto del envejecimiento poblacional 9](#_Toc208396565)

[Adaptación al cambio climático es la clave para sostener comunidades y economías en Centroamérica y República Dominicana 11](#_Toc208396566)

[Treinta años de contrastes: transformaciones profundas amplían las brechas entre los países de Centroamérica y República Dominicana 15](#_Toc208396567)

[Integración regional en su momento más crítico: falta de apoyo político y tensiones internas amenazan el futuro del SICA 18](#_Toc208396568)

**Comunicado de Prensa 1**

Centroamérica en un punto de inflexión:

## Séptimo Informe Estado de la Región destaca oportunidades para fortalecer la democracia y el desarrollo humano sostenible

* *El Volumen 3 del Séptimo Informe Estado de la Región ofrece una mirada profunda sobre los desafíos actuales y las posibilidades de transformación en la región de CARD.*
* *A pesar de un panorama complejo, el informe subraya el potencial de la región para relanzar la integración y construir soluciones conjuntas.*

**País, fecha.** El Programa Estado de la Nación presentó recientemente el Volumen 3 del Séptimo Informe Estado de la Región, que analiza el desarrollo humano sostenible en los países de Centroamérica y la República Dominicana (región CARD) durante el período 2018–2023. Esta edición identifica retos significativos, pero también ofrece un mensaje de esperanza y un llamado a la acción, destacando el papel clave que puede jugar la región en la construcción de un futuro próspero más inclusivo, democrático y sostenible.

En las últimas décadas, la región logró avances significativos como la diversificación económica, el fortalecimiento de sus vínculos con los mercados internacionales y la reducción de la pobreza. Sin embargo, persisten desafíos como la desigualdad, la fragilidad institucional y las presiones ambientales, que requieren respuestas urgentes y coordinadas entre los países.

Desde una perspectiva de largo plazo, la región también amplió libertades y avanzó en la democratización de sus sistemas políticos, especialmente en lo relacionado con el acceso al poder a través de elecciones. No obstante, existen importantes rezagos para fortalecer la capacidad de sus instituciones para atender las necesidades de la población y las profundas transformaciones experimentadas por las sociedades y las economías.

Uno de los principales hallazgos del informe es la tendencia a la autocratización en algunos países, acompañada de un creciente desencanto ciudadano con los resultados de la democracia. Esta situación se da, paradójicamente, en un contexto de crecimiento económico, que, aunque superior al promedio latinoamericano, ha sido ambientalmente insostenible y socialmente excluyente.

El informe también destaca que la región opera en un entorno internacional complejo y cambiante, marcado por tensiones geopolíticas.

En este contexto, las sociedades de Centroamérica y la República Dominicana se enfrentan a dos decisiones clave:

1. **Fortalecer la democracia**, como vía para lograr consensos y mejorar la calidad de vida de las personas, o permitir una mayor concentración del poder que podría poner en riesgo libertades y derechos fundamentales.
2. **Impulsar la integración regional** para enfrentar un contexto internacional incierto y generar soluciones conjuntas a problemas compartidos, o avanzar de forma aislada, lo que podría fragmentar aún más la región frente a un mundo cada vez complejo.

“Estamos en un momento decisivo. El camino que elijamos ahora puede marcar la diferencia para las próximas generaciones. Fortalecer la democracia y apostar por una integración más efectiva nos permitirá enfrentar los desafíos y aprovechar nuestras fortalezas como región”, expresó **Alberto Mora**, Coordinador de la Investigación.

**Hallazgos clave del Informe:**

* El crecimiento económico ha sido superior al promedio latinoamericano, pero sus beneficios no se distribuyen de manera equitativa.
* En países como Honduras, Guatemala y Nicaragua, más de la mitad de los hogares aún viven en pobreza.
* Hay señales claras de una ciudadanía dispuesta al cambio, lo que representa una oportunidad para renovar el pacto social y fortalecer la democracia a partir de la búsqueda del bien común.
* La integración regional puede ser una herramienta poderosa para impulsar soluciones sostenibles y responder mejor al contexto global.

El Informe hace un llamado a los gobiernos, la ciudadanía y la sociedad civil a trabajar en conjunto para fortalecer las democracias, reducir las brechas sociales y proteger el patrimonio ambiental, sentando las bases de un modelo de desarrollo más justo e inclusivo.

Esta investigación contó con el apoyo financiero del Rockefeller Brothers Fund y la Unión Europea mediante el Programa EUreCA.

Para más información, descargue el informe completo en <https://hdl.handle.net/20.500.12337/10176>

**Sobre el Programa Estado de la Nación (PEN)**

El Programa Estado de la Nación es una iniciativa de investigación y formación sobre desarrollo humano sostenible.

Pertenece al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de Costa Rica, entidad que agrupa a las cinco universidades públicas de ese país. También cuenta con el respaldo de la Defensoría de los Habitantes de la República.

Desde 1994 brinda información relevante para la formulación de políticas públicas y opinión crítica de la ciudadanía sobre temas estratégicos, tanto en Costa Rica como en Centroamérica.

**Para más información, contactar a:**

Gabriela Monge Torres

+506 83341438

gmonge@estadonacion.or.cr

**Comunicado de Prensa 2**

## Alta dependencia de combustibles fósiles y falta de inversión impiden aprovechar el alto potencial de energías renovables en la región CARD

* *En 2022, los derivados del petróleo representaron el 54% del consumo energético final en la región, seguidos por la leña (28%), ambas fuentes concentran las emisiones de gases de efecto invernadero de la región.*
* *El 37% del total de la energía fue consumida por el sector transporte, altamente dependiente de hidrocarburos. Esto se debe al aumento del parque vehicular y la falta de sistemas de transporte público modernos y eficientes.*

**País, fecha.** – A pesar de contar con un alto potencial para la generación de electricidad a partir de fuentes renovables y locales, la región Centroamericana y República Dominicana (CARD) sigue atrapada en un modelo energético ambientalmente insostenible. Así lo revela el más reciente Informe Estado de la Región del *Programa Estado de la Nación*, que señala que la dependencia de combustibles fósiles importados, la falta de inversión en infraestructura para generar energías limpias y un sistema de transporte ineficiente están impidiendo una transición energética y sostenible.

Entre 2015 y 2022, la capacidad instalada para generación eléctrica en la región creció de 18.936 MW a 24.112 MW, y la participación de fuentes renovables en la matriz de generación aumentó del 56% al 67%, impulsada principalmente por la expansión de la energía solar fotovoltaica, hidroeléctrica y eólica. Sin embargo, este avance no se ha trasladado al consumo energético, que continúa dominado por combustibles fósiles. En 2022, el 54% del consumo final correspondió a derivados del petróleo y el 28% a leña, mientras que solo el 15% fue electricidad, de la cual el 40% aún proviene de fuentes no renovables.

El informe advierte que este patrón energético incrementa la huella ecológica regional, la cual alcanzó niveles alarmantes en 2022: se requeriría un 43% más de territorio para sostener los actuales niveles de consumo de recursos naturales y emisiones contaminantes. Costa Rica, Belice, El Salvador, Guatemala y República Dominicana presentan los mayores déficits ecológicos, cuatro de ellos superiores al promedio regional.



El sector transporte es uno de los principales responsables del alto consumo de energía fósil, con un 37% del total en 2022. En las últimas décadas, la región ha experimentado un crecimiento acelerado del parque automotor (58% entre 2015 y 2022), mientras los avances en sistemas modernos y sostenibles de transporte público han sido limitados. Solo Panamá y República Dominicana han implementado sistemas de metro. Los bajos puntajes en el índice de movilidad sostenible de la mayoría de los países de CARD reflejan ese rezago. En la edición 2022 de ese índice los países centroamericanos se encuentran por debajo de la posición 72 de 183 naciones evaluadas.

Otro obstáculo para avanzar en sostenibilidad es la baja eficiencia energética. Aunque hubo reducciones en la intensidad energética en algunos países, cinco de los ocho presentan valores superiores al promedio latinoamericano, y en países como Honduras, Nicaragua y Guatemala esto se asocia al alto consumo de leña en el sector residencial. Además, las pérdidas eléctricas por ineficiencias en transmisión y distribución superan los estándares internacionales: alcanzan hasta un 34% en países como Honduras y República Dominicana.

**Situación local y propuestas a considerar en la región CARD**

En el caso de **El Salvador** se ha avanzado significativamente en la generación de electricidad con fuentes renovables no convencionales como geotermia y solar. Aun así, el 72% de su consumo energético final sigue dependiendo de combustibles fósiles. El país presenta una intensidad energética favorable y pérdidas eléctricas moderadas. Pese a estos avances, sufre un déficit ecológico y mantiene una movilidad urbana ineficiente y contaminante.

**Costa Rica** destaca como líder regional en sostenibilidad energética: genera más del 99% de su electricidad a partir de fuentes renovables y muestra una de las menores intensidades energéticas, reflejando un uso más eficiente de la energía en relación con los otros países. A pesar de que el 52% de su consumo final proviene de combustibles fósiles, ha mantenido niveles relativamente bajos de pérdidas eléctricas (11%–15%) pero necesita mejoras significativas en su transporte público. Sin embargo, enfrenta un déficit ecológico, lo que evidencia presiones sobre sus recursos naturales.

**Guatemala** tiene una de las menores dependencias regionales de combustibles fósiles (36%), gracias al alto uso de leña, aunque esto plantea retos ambientales y de salud. Registra un parque automotor de casi 5 millones de vehículos, el segundo mayor de la región. Presenta una de las intensidades energéticas más elevadas (4.42 MJ por unidad de PIB) y un déficit ecológico creciente, reflejo de su alta huella de consumo.

**Honduras** muestra liderazgo en generación de electricidad con fuentes renovables no convencionales, pero enfrenta serios desafíos en eficiencia: presenta las mayores pérdidas eléctricas de la región (34%) y una alta intensidad energética (4.22 MJ), es decir, un alto consumo por unidad de PIB. Aunque su dependencia de hidrocarburos (57%) es menor que la media regional, tiene una importante proporción de consumo de leña en el sector residencial y su baja puntuación en movilidad sostenible revela un rezago importante en transporte limpio.

**Nicaragua** tiene una baja dependencia de combustibles fósiles (43%) en relación con los demás países y aumentó la generación con energías renovables, incluyendo fuentes no convencionales. Sin embargo, enfrenta pérdidas eléctricas altas (23%) y una intensidad energética de las más elevadas (4.29 MJ) de la región, lo que evidencia ineficiencia en el uso de recursos energéticos. Su infraestructura de movilidad también es poco sostenible.

**Panamá** sobresale como el país centroamericano con la mejor calificación en movilidad sostenible, ubicándose en el puesto 45 a nivel mundial. Su consumo final de energía proviene en un 76% de combustibles fósiles, y aunque su generación de electricidad aún depende en buena parte de fuentes no renovables, muestra buena eficiencia energética. Las pérdidas eléctricas son moderadas y su huella ecológica supera su biocapacidad.

**República Dominicana** muestra una alta dependencia de combustibles fósiles (87%) y genera el 84% de su electricidad con fuentes no renovables. Tiene uno de los niveles más altos de pérdidas eléctricas (33%) y la mayor tasa de vehículos por mil habitantes (487), lo que incide en su posición como el país con peor desempeño regional en movilidad sostenible (puesto 138 de 183 países evaluados a nivel mundial). Además, presenta un déficit ecológico severo, indicador de alta presión sobre sus recursos naturales y la contaminación que genera.

El informe concluye que, para revertir esta situación, la región debe redoblar esfuerzos en cinco frentes:

1. Aumentar la inversión en infraestructura para generación, transmisión y almacenamiento de energías renovables no convencionales.
2. Reducir la dependencia de combustibles fósiles, especialmente en el transporte y el sector residencial.
3. Impulsar sistemas de movilidad sostenible y planificación urbana eficiente.
4. Mejorar la eficiencia energética y reducir las pérdidas eléctricas.
5. Promover políticas públicas que articulen sostenibilidad ambiental con desarrollo humano y equidad.

Con este contexto, el informe permite concluir que la región CARD tiene la capacidad para liderar una transición energética justa, pero lograrlo dependerá de voluntad política, inversiones estratégicas y una visión integradora que priorice la sostenibilidad ambiental como base del bienestar presente y futuro.

Esta investigación contó con el apoyo financiero del Rockefeller Brothers Fund y la Unión Europea mediante el Programa EUreCA.

Para más información, descargue el informe completo en <https://hdl.handle.net/20.500.12337/10176>

**Comunicado de Prensa 3**

## Centroamérica y República Dominicana se enfrentan al reto del envejecimiento poblacional

* *En 2050, una de cada cuatro personas en la región tendrá más de 60 años. El envejecimiento avanza con velocidad desigual, liderado por Costa Rica y Panamá.*
* *Menos de la mitad de la población en edad de jubilarse recibe una pensión en la mayor parte de los países de la región y para el 75% de adultos mayores que la tiene, su monto es insuficiente (menor al de la línea de pobreza).*

**País, fecha.** El reciente Informe Estado de la Región del *Programa Estado de la Nación* confirma que Centroamérica y República Dominicana (CARD) están inmersos en una profunda transición demográfica, con implicaciones decisivas para sus posibilidades de desarrollo humano sostenible futuro. A medida que aumenta la esperanza de vida y disminuyen las tasas de fecundidad, crece rápidamente la proporción de personas adultas mayores, lo que transforma las necesidades sociales, económicas y de salud de la región.

Entre 1994 y 2020, la proporción de personas mayores de 60 años casi se duplicó (del 5% al 9%) y se espera que alcance el 25% en 2050, lo que representa un incremento de 5,5 a 14,5 millones de personas. Costa Rica lidera este cambio demográfico: en 2020, el 15% de su población tenía más de 60 años, superando el promedio latinoamericano (13%) y duplicando la proporción de países como Honduras, Guatemala o Belice. Para mediados de siglo, se estima que una tercera parte de la población costarricense será adulta mayor.

Uno de los principales motores de esta transformación es el aumento sostenido en la esperanza de vida. En 2025, Costa Rica y Panamá alcanzan entre 80 y 81 años, mientras que en países como El Salvador y Guatemala el promedio se sitúa entre 72 y 74 años. En Nicaragua es de 75 años. El informe destaca también la persistente brecha de género: las mujeres viven, en promedio, 5,8 años más que los hombres, y en El Salvador esta diferencia llega a 8,7 años (76,7 vs. 68 años), aumentando su vulnerabilidad si no se implementan políticas diferenciadas para hombres y mujeres.

El documento advierte que los sistemas actuales no están preparados para esta nueva realidad:

* En 2023, la mayor parte de los países de la región invirtieron menos de $100 anuales por persona en salud, una cifra incompatible con el aumento de enfermedades crónicas y la demanda de cuidados prolongados.
* Más del 75% de las personas adultas mayores en cinco de los siete países para los que existe información, reciben pensiones insuficientes, con menor acceso y beneficios más bajos para las mujeres. Solo Costa Rica y Panamá superan el 50% de cobertura.
* En Guatemala el 38% y Honduras el 62% de los hogares con adultos mayores están en situación de pobreza.

Además, el informe advierte que, para enfrentar el envejecimiento es fundamental mejorar los bajos niveles de productividad laboral que tienen actualmente los países. De ello dependerán las posibilidades de crecimiento económico futuro porque la población en entre 15 y 64 años será cada vez menor. Uno de los factores que limita la posibilidad de mejorar este indicador es el bajo nivel educativo de la población económicamente activa y las bajas coberturas educativas que actualmente tienen los países.

Frente a este escenario, el informe llama a implementar políticas públicas integrales, con visión de largo plazo: reformas en salud y pensiones, políticas de género y cuidado, mejora en la cobertura y calidad de la educación, fortalecer los sistemas de educación y formación técnica profesional, impulsar la modernización productiva y emprendimientos de alto valor agregado y acciones para garantizar el bienestar de la población que envejece (cuido, salud, entretenimiento).

Esta investigación contó con el apoyo financiero del Rockefeller Brothers Fund y la Unión Europea mediante el Programa EUreCA.

Para más información, descargue el informe completo en <https://hdl.handle.net/20.500.12337/10176>

**Comunicado de Prensa 4**

## Adaptación al cambio climático es la clave para sostener comunidades y economías en Centroamérica y República Dominicana

* *Evidencia científica señala que la gestión ambiental deficiente y los eventos climáticos en la región CARD han causado históricamente importantes impactos que se agravarán con el cambio climático en los próximos años.*
* *Dada la alta vulnerabilidad de la región, las políticas enfocadas en adaptación al cambio requieren la articulación de actores múltiples y un abordaje regional, además de ser complementadas con acciones intersectoriales en todos los niveles.*

**País, fecha.** – El más reciente Informe Estado de la Región del *Programa Estado de la Nación* confirma que el cambio climático ya tiene efectos visibles y significativos en Centroamérica y República Dominicana (CARD), agudizando problemas estructurales que comprometen las condiciones para el desarrollo humano sostenible.

La región enfrenta una creciente vulnerabilidad climática que afecta directamente a las personas, medios de vida, ecosistemas, infraestructuras y economías locales. Esta situación se agrava por patrones de crecimiento urbano desordenado, desigualdades sociales, asimetrías territoriales y fragilidades productivas.

Entre los principales hallazgos del estudio se destacan:

* **Aumento de la temperatura promedio**: Bajo el escenario climático más pesimista analizado en el informe, se proyecta un incremento entre 2 °C y 4 °C en casi todos los municipios de la región hacia finales del siglo.
* **Disminución de precipitaciones**: Se anticipa una reducción del 5 % al 31 %, dependiendo del país, con mayor impacto en el Corredor Seco Centroamericano (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) y las zonas costeras de República Dominicana.
* **Eventos extremos**: Se estima que en los próximos años se tendrá un aumento de las lluvias intensas que provocan inundaciones y deslizamientos, en paralelo con sequías prolongadas, acentuando la vulnerabilidad histórica de la población e infraestructuras de la región CARD en un contexto de desarrollo humano sostenible limitado.
* **Impactos en sectores clave**: El cambio climático afecta los cultivos, la cobertura forestal, la generación hidroeléctrica y el acceso al agua, este último afectando en especial zonas densamente pobladas. La mayoría de las centrales hidroeléctricas están ubicadas en municipios con pronóstico de menor precipitación.
* **Riesgos en zonas costeras**: El aumento del nivel del mar y ciclones más intensos amenazan especialmente a Belice, Honduras, Panamá y el Caribe en general, en donde se estima que 17 de cada 100 habitantes que viven en zonas costeras de baja elevación serían directamente afectadas.

La región ya presenta evidencia de movilidad climática y desplazamientos forzados por desastres, como ha sucedido con cerca de 2,1 millones de personas desplazadas en América Latina y el Caribe solo en 2023. Se estima que para 2050, hasta 17 millones de personas podrían verse desplazadas en la región por causas climáticas y ambientales. Es decir, los efectos asociados al cambio climático tienden a agravarse en el tiempo si no se toman medidas de adaptación a profundidad.

**Desafíos y oportunidades de la adaptación**

A partir de la evidencia recopilada en el *Sétimo Informe Estado de la Región*, se han delineado escenarios probables. En el caso de **El Salvador**, se estima que la aridez avanzará progresivamente y, hacia 2099, afectará casi todo el país, comprometiendo la seguridad alimentaria y el acceso al agua. Municipios como La Unión (26.087 habitantes) y Pasaquina (28 desastres registrados) podrían mostrar alta vulnerabilidad por su dependencia agrícola. Más del 70 % del territorio en San Antonio Pajonal y El Sauce está cubierto por pastizales, lo que agrava su exposición. La limitada capacidad económica local dificulta la adaptación, por lo que urge priorizar sistemas de riego, manejo sostenible del agua y diversificación productiva

**Guatemala** enfrentaría un proceso acelerado de aridificación que compromete regiones densamente pobladas y con infraestructura crítica. Para finales de siglo, zonas como Zacapa, Chiquimula y Jalapa podrían convertirse en áreas áridas permanentes. Municipios como Ocós, Cabañas y El Jícaro muestran alta vulnerabilidad por su dependencia agrícola y baja diversificación del uso del suelo. Esta situación plantea riesgos para la seguridad alimentaria, los servicios básicos y la economía local. La respuesta adaptativa se ve limitada por la fuerte dependencia del financiamiento internacional.

En **Honduras**, se estima que la aridez avanza desde el sur hacia el centro y norte del país, afectando municipios clave como Choluteca, Marcovia, Amapala y San Lorenzo. Estas zonas dependen fuertemente de la agricultura y ganadería, lo que las hace especialmente vulnerables. La infraestructura crítica ya enfrenta riesgos, y se prevén graves impactos económicos y sociales hacia finales de siglo. La alta recurrencia de desastres hidrometeorológicos refuerza la urgencia de implementar estrategias de adaptación. Fortalecer la gestión del agua, diversificar la economía y proteger los ecosistemas serán medidas clave.

En **Costa Rica**, la aridez avanza especialmente en Guanacaste, afectando municipios clave como Liberia (88.576 hab.), Santa Cruz (74.969) y Carrillo. Para 2079-2099, se prevé que Liberia, Bagaces y Carrillo enfrenten aridez permanente, comprometiendo agricultura, ganadería y turismo. Carrillo y Bagaces presentan alta exposición con 52 y 34 desastres hidrometeorológicos, respectivamente. Municipios con hasta 56% de cobertura forestal son vulnerables a la degradación ambiental. La reforestación, riego eficiente y diversificación económica son prioritarios para la adaptación.

En **Panamá**, la aridez afectará inicialmente el occidente (2020-2030), expandiéndose hacia el centro en 2040-2060, con impacto creciente en municipios como David, Boquete y Bugaba. Para 2079-2099, se prevé una caída significativa en la productividad agrícola en Chiriquí y Veraguas. Municipios como Aguadulce (53.590 hab.) y Chitré (57.909 hab.) ya han sufrido 29 y 23 desastres hidrometeorológicos, respectivamente. Aguadulce, Los Santos y Guararé tienen más del 50% de su territorio en pastizales, aumentando su vulnerabilidad. Se requiere inversión urgente en riego eficiente, diversificación económica y cooperación regional, especialmente en Pocrí (3.745 hab.), con alta exposición y bajos recursos.

En **República Dominicana**, entre 2020 y 2030, la aridez impacta el suroeste (Pedernales, Barahona, Azua), afectando agricultura y disponibilidad de agua. De 2040 a 2060, se expande hacia el norte y este (San Juan, Elías Piña), intensificando los riesgos hídricos y desplazamientos poblacionales. Para 2079-2099, gran parte del sur y este, incluyendo Santo Domingo, enfrenta aridez extrema que amenaza seguridad alimentaria y estabilidad socioeconómica. Municipios como Matanzas (17.044 hab.) y Pueblo Viejo, con alta proporción de pastizales o cultivos, son muy vulnerables. Aunque la incidencia histórica de desastres es baja, se requieren urgentes medidas de adaptación, riego eficiente y diversificación económica.

Ante ese y otros escenarios el informe alerta que, si bien las políticas de adaptación han avanzado, no lo han hecho con la escala, ni con las condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad de las acciones o reducir los riesgos. El análisis de 269 experiencias de adaptación en los países de Centroamérica y República Dominicana (sin Nicaragua) revela que el 88 % de ellas han contado con participación estatal, aunque casi todas han requerido alianzas estratégicas con el sector privado, sociedad civil, organismos cooperantes, ONG y academia. Sin embargo, el estudio identifica importantes limitaciones:

* Alta dependencia de financiamiento internacional.
* Limitada capacidad institucional en algunos territorios.
* Necesidad de una mayor articulación territorial y multisectorial.

Actualmente, el 55 % de las acciones de adaptación en marcha se centran en biodiversidad, conservación y promoción de prácticas agrícolas sostenibles, y el 65 % están alineadas con políticas públicas estatales. Aun así, más de la mitad de las iniciativas que ya han concluido fueron impulsadas por otros actores distintos al Estado, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el liderazgo gubernamental para concretar las acciones.

En este contexto, también es crucial identificar los retos ambientales que los países enfrentarán localmente y cómo un enfoque de adaptación puede ofrecer soluciones específicas para mitigar riesgos e identificar nuevas oportunidades.

**Una prioridad estratégica para la región**

El informe enfatiza que la región CARD tiene una baja participación en las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero una alta exposición a sus efectos. Por ello, la adaptación al cambio climático no es solo una urgencia ambiental, sino una condición imprescindible para garantizar las actividades sociales y productivas en el presente y futuro de la región.

A la luz de los hallazgos identificados en el informe, se hace un llamado a los gobiernos, ciudadanía, sociedad civil y comunidad internacional a redoblar esfuerzos y recursos para impulsar una agenda de interés común de adaptación climática con visión de largo plazo, equidad territorial y sostenibilidad para proteger el patrimonio ambiental, sentando las bases de un modelo de desarrollo más justo e inclusivo.

Esta investigación contó con el apoyo financiero del Rockefeller Brothers Fund y la Unión Europea mediante el Programa EUreCA.

Para más información, descargue el informe completo en <https://hdl.handle.net/20.500.12337/10176>

**Comunicado de Prensa 5**

## Treinta años de contrastes: transformaciones profundas amplían las brechas entre los países de Centroamérica y República Dominicana

* *Las sociedades de la región han cambiado aceleradamente, pero el ritmo desigual de desarrollo ha profundizado las asimetrías.*
* *Honduras y Guatemala enfrentan rezagos estructurales que limitan el aprovechamiento de oportunidades y la reducción de la pobreza.*
* *El más reciente Informe Estado de la Región alerta que, sin cooperación regional y políticas de inclusión social, las brechas podrían ser cada vez mayores.*

**País, fecha.** – Los países de Centroamérica y República Dominicana (CARD) no son los mismos de hace tres décadas. El Séptimo Informe Estado de la Región confirma que, en tan solo 30 años, la región ha vivido una transformación profunda en su estructura demográfica, social, económica, política, territorial y ambiental. Sin embargo, debido al rezago histórico en algunos países, el Informe también alerta que estos cambios no han tenido la misma magnitud e implicaciones, lo que ha ampliado las brechas de desarrollo y ha profundizado las asimetrías regionales.

Hoy, la región tiene casi el doble de la población que tenía en los años noventa. Se trata de una población más urbana, más alfabetizada y con mayor esperanza de vida. Las economías se han diversificado y están integradas activamente a los mercados internacionales. También se dieron avances importantes en el acceso a servicios y en democratización, como la realización periódica de elecciones y su consolidación como el mecanismo para el acceso y el relevo en el poder político.

Pero junto con estos logros, el Informe identifica una creciente presión sobre los ecosistemas, un aumento sostenido en la huella ecológica y un patrón de desarrollo que no ha sido equitativo entre países ni sostenible con el ambiente. Las diferencias entre el norte-centro de la región (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) y el sur (Costa Rica y Panamá), junto con República Dominicana, se han ampliado en aspectos clave como el ingreso per cápita, el nivel educativo, la inversión social y la capacidad institucional para implementar políticas públicas.

Honduras, Nicaragua y Guatemala enfrentan rezagos estructurales críticos. En ambos, cerca de la mitad de la población en edad laboral (15 a 64 años) no ha completado la educación primaria, lo que limita sus posibilidades de acceder a empleos formales y bien remunerados. Además, los niveles de inversión social por habitante son considerablemente más bajos en comparación con los países del sur. Estos factores, combinados con la persistencia de altos niveles de pobreza, reducen la resiliencia de las sociedades y dificultan su capacidad de respuesta ante las crisis.

Mientras tanto, Costa Rica, Panamá y República Dominicana han logrado consolidar economías más dinámicas, con mejores resultados sociales y una mayor capacidad para ejecutar políticas públicas inclusivas. Esto se refleja en indicadores como el PIB per cápita, el peso del sector servicios en la economía y la cobertura y calidad de sus sistemas de salud y educación.

“Las transformaciones de los últimos 30 años son innegables. Pero también lo es el hecho de que no todos los países han podido capitalizar esos cambios de la misma manera. La región corre el riesgo de fracturarse aún más si no se abordan con seriedad las desigualdades estructurales que han hecho que millones de personas estén excluidos de las oportunidades generadas por el crecimiento económico”, señaló Alberto Mora, coordinador del Informe.

El Informe también identifica que las mayores brechas a lo interno de la región coinciden con un contexto internacional incierto y volátil y la peor crisis del proceso de integración regional desde la creación del Sistema de Integración Centroamericano (fragmentación regional SICA) en 1991. Aunque este panorama dificulta la formulación de estrategias comunes en temas clave, de carácter trasnacional como el cambio climático, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y la gestión de las migraciones, en otros momentos de la historia los países han logrado, en condiciones similares a las actuales, ponerse de acuerdo y resolver problemas comunes.

Sin una visión articulada, los países de CARD podrían enfrentar mayores tensiones internas y externas, y reducir sus márgenes de maniobra para lidiar con el contexto internacional y los desafíos de su desarrollo en el mediano y largo plazo. Ello pasa por repensar y fortalecer el proceso de integración regional, así como otros espacios regionales de cooperación y diálogo.

**Honduras** enfrenta grandes desafíos estructurales en comparación con sus vecinos. El Informe señala que cerca de la mitad de su población en edad laboral no ha completado la educación primaria, lo que limita seriamente las oportunidades de desarrollo económico y acceso a empleos formales. La inversión social por habitante continúa siendo de las más bajas de la región (228 dólares al año en 2023), mientras que la pobreza afecta a cerca de 8 de cada 10 hogares y una tercera parte de las personas entre 19 y 24 años no estudian ni trabajan. A pesar de contar con un bono demográfico, el país no ha logrado capitalizarlo plenamente debido a debilidades institucionales y limitadas capacidades del Estado para implementar políticas sostenidas e inclusivas.

En **Guatemala**, el Informe señala que persisten fuertes rezagos en el acceso a la educación prescolar y secundaria. Cerca de la mitad de la población en edad laboral no ha completado la educación primaria, lo que limita su integración en el mercado laboral formal. Además, se mantienen altos niveles de pobreza y una alta concentración de los ingresos, factores que afectan la cohesión social y constituyen las bases objetivas del descontento ciudadano con el Estado y las instituciones.

**El Salvador** ha logrado avances en reducción de pobreza, pero enfrenta grandes desafíos en cobertura educativa y persiste la expulsión de población joven y en edad productiva vía las migraciones. La inversión social por habitante se encuentra en niveles intermedios en la región, y su economía sigue siendo altamente dependiente de las remesas.

**Panamá** destaca como una de las economías más dinámicas de la región, con un alto PIB per cápita y un fuerte sector de servicios logísticos y financieros. Sin embargo, el Informe también advierte sobre los altos niveles de desigualdad debido a la concentración de los ingresos y las asimetrías internas, especialmente entre las áreas urbanas y las zonas rurales y comarcas indígenas, donde los niveles de pobreza y exclusión social son elevados.

**República Dominicana** ha mostrado un crecimiento económico sostenido, apoyado por el turismo, las remesas y la industria de zonas francas. El país ha incrementado su inversión social y presenta mejores indicadores de salud y educación que la mayoría de sus vecinos del norte-centro. Sin embargo, enfrenta desafíos ambientales críticos debido a su alta dependencia de los hidrocarburos y vulnerabilidad al cambio climático.

**Costa Rica** ha mantenido uno de los niveles de desarrollo humano más altos de la región, con el nivel mayor de inversión social y políticas públicas orientadas al bienestar. El Informe destaca su liderazgo en educación, salud y sostenibilidad ambiental. No obstante, también enfrenta crecientes tensiones fiscales, desigualdades territoriales y retos en materia de gobernabilidad democrática. A pesar de estos desafíos, el país conserva una institucionalidad fuerte y una ciudadanía activa que han sido clave para enfrentar y contener el deterioro político-institucional.

El Informe finaliza con un llamado a construir una nueva etapa para la región basada en el aprendizaje compartido, el respeto a los derechos humanos, el uso estratégico de los recursos naturales y el compromiso con una democracia efectiva, que responda a las necesidades y expectativas de la población. Las oportunidades están al alcance, pero requieren acciones sostenidas en el tiempo y orientadas al bien común.

A pesar de los retos, el Informe también reconoce que la región cuenta con una base de progreso sobre la cual construir un futuro más equitativo. La mejora sostenida en indicadores como la esperanza de vida y la alfabetización, junto con la diversificación productiva e inserción en la economía internacional demuestran que el cambio es posible cuando se articulan políticas públicas con visión largo plazo.

Además, la juventud de la región representa una oportunidad única: impulsando la modernización productiva con inversiones estratégicas en educación, salud y empleo digno, es posible aprovechar este bono demográfico y reducir las desigualdades. Centroamérica y República Dominicana tienen en sus manos la posibilidad de transformar los rezagos en impulso, si se apuesta por la cooperación, la inclusión y el fortalecimiento institucional como pilares del desarrollo humano sostenible. No hacerlo convertirá en frustración las oportunidades que hoy tiene la región.

El Informe completo está disponible para descarga en: <https://hdl.handle.net/20.500.12337/10176>

**Comunicado de Prensa 6**

## Integración regional en su momento más crítico: falta de apoyo político y tensiones internas amenazan el futuro del SICA

* *Debilitamiento institucional, acefalía prolongada y desinterés de los gobiernos nacionales erosionan la capacidad de acción conjunta.*
* *Los grandes desafíos de Centroamérica y República Dominicana requieren respuestas coordinadas que hoy parecen inalcanzables.*

**País, fecha.** **–** El Séptimo Informe Estado de la Región advierte que el proceso de integración regional atraviesa su momento más crítico desde la creación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en 1991. La región enfrenta un contexto altamente desafiante, marcado por el cambio climático, la inseguridad y el crimen organizado, un contexto internacional volátil e incierto y una creciente presión migratoria generada tanto por los flujos a lo interno de la región como extracontinentales. Ante estos desafíos comunes, la cooperación regional se vuelve más urgente, pero el debilitamiento progresivo del SICA limita severamente la capacidad de respuesta coordinada de los países.

El SICA ha sido, en diferentes momentos, una plataforma útil para canalizar cooperación, articular respuestas ante emergencias y facilitar el diálogo político. Sin embargo, en los últimos años, esa capacidad se ha erosionado aceleradamente.

Durante el período 2021–2024 se acentuaron tres factores críticos que explican el estancamiento del proceso de integración. En primer lugar, hubo una caída pronunciada en la actividad política del sistema. Las cumbres presidenciales, que entre 2000 y 2010 se celebraban hasta cuatro veces por año, pasaron a menos de una por año en la actualidad, reflejo del desinterés político de los mandatarios. Aunque existen otras instancias de coordinación sectorial en las que participan los ministros y jerarcas de otras instituciones, este desinterés debilita la conducción política del sistema.

En segundo lugar, el Informe identifica una prolongada acefalía en la Secretaría General del SICA, órgano central para la coordinación del proceso de integración. Entre enero de 2021 y diciembre de 2024, el cargo estuvo vacante durante 27 de los 48 meses. Esta ausencia de liderazgo debilitó la toma de decisiones, paralizó proyectos estratégicos y acentuó la percepción de inoperancia institucional. La imposibilidad de llegar a un acuerdo entre Estados miembros sobre quién debía ocupar la Secretaría impidió llenar la vacante y evidencia con claridad las dificultades de diálogo y entendimiento entre regímenes políticos polarizados y cada vez más alejados de la democracia.

El tercer factor está relacionado con los retrocesos en transparencia y rendición de cuentas. Herramientas como el Sistema de Cooperación Regional (SICOR) se encuentran desactualizadas, y el acceso a información sobre el desempeño institucional se ha vuelto aún más limitado que en el pasado. Esto ha reducido la capacidad de monitoreo ciudadano y técnico sobre la gestión del sistema, afectando su legitimidad y debilitando el vínculo con actores clave como la sociedad civil, los sectores productivos y la cooperación internacional.

El Informe subraya que esta crisis institucional no es meramente coyuntural, sino que se suma a debilidades estructurales que el SICA arrastra desde hace décadas. Entre ellas, la morosidad en el pago de cuotas por parte de varios países miembros, la baja participación de algunos Estados en los órganos del sistema y la alta dependencia de recursos externos para su funcionamiento. Todo ello ha limitado la capacidad del SICA para formular e implementar políticas públicas regionales que tengan impacto concreto en la vida de las personas.

Esta falta de articulación ocurre en un contexto regional donde los problemas trascienden las fronteras nacionales. La migración irregular, la expansión de redes criminales, los efectos del cambio climático, el convulso contexto internacional y la creciente vulnerabilidad y riesgo a desastres son fenómenos compartidos que requieren respuestas comunes. Sin embargo, la ausencia de acuerdos entre los gobiernos y el deterioro institucional han conducido a respuestas aisladas, muchas veces contradictorias entre países vecinos, no solo impide respuestas oportunas y efectivas, sino que aumenta los costos políticos y sociales de la inacción.

La crisis migratoria es un claro ejemplo. La región de CARD se ha convertido en un corredor clave para migrantes no solo centroamericanos, sino también provenientes de Sudamérica, el Caribe y África. La falta de coordinación para atender el tránsito de estas personas ha generado situaciones caóticas en las fronteras, presión sobre los sistemas nacionales de atención y fricciones diplomáticas. Lo mismo ocurre con el crimen organizado, que opera a través de redes transnacionales y aprovecha los vacíos de gobernanza regional para expandir su control territorial y logístico.

En el caso de **Honduras**, el Informe destaca que el país ha mostrado una participación intermitente en las instancias regionales, sumado a un cumplimiento desigual en sus compromisos financieros con el SICA. Esta situación reduce su capacidad de incidencia en temas como migración, seguridad y cambio climático. Además, su ubicación estratégica lo convierte en un punto clave para el tránsito migratorio y para las operaciones del crimen organizado. La falta de articulación con países vecinos y con los mecanismos del SICA limita la efectividad de las políticas nacionales y obstaculiza la cooperación técnica y operativa en áreas sensibles como la seguridad fronteriza, la respuesta a emergencias o la gestión de recursos compartidos.

En el caso de **Guatemala**, el Informe señala que si bien el país mantiene presencia en instancias regionales, su participación se limita en gran medida a aspectos técnicos, con escasa incidencia en las decisiones políticas del sistema. Esta desconexión reduce su protagonismo dentro del SICA, a pesar de ser uno de los países con mayor peso demográfico y económico de la región. Guatemala enfrenta retos significativos vinculados a la migración, la seguridad y la gestión ambiental, que requieren articulación regional. Sin embargo, la falta de liderazgo político sostenido debilita su capacidad de impulsar soluciones conjuntas y de beneficiarse plenamente de los mecanismos regionales de cooperación.

El Informe advierte que **El Salvador** ha mostrado una baja participación en varias instancias del SICA durante los últimos años, lo cual ha sido señalado por analistas y observadores como uno de los factores que contribuye al estancamiento del proceso de integración. Además, se han registrado tensiones con otros países miembros, lo que ha dificultado la coordinación en temas clave como la movilidad humana y la seguridad. Esta situación reduce las oportunidades del país para fortalecer su posicionamiento regional y limita la cooperación técnica en áreas de interés común, como el cambio climático, la respuesta a emergencias y la prevención de conflictos sociales derivados de vulnerabilidades compartidas.

En el caso de **República Dominicana**, el Informe destaca que el país ha promovido iniciativas clave dentro del SICA, especialmente en materia de cooperación, comercio y seguridad. Sin embargo, este país es -después de Belice- el que no participa en una mayor cantidad de instituciones y órganos de la integración. Como nación insular con alta exposición al cambio climático y punto estratégico en flujos migratorios y logísticos, República Dominicana necesita con urgencia una integración regional eficaz. La fragmentación actual impide consolidar alianzas duraderas y dificulta el aprovechamiento de mecanismos conjuntos que podrían fortalecer la resiliencia del país ante amenazas compartidas.

Según el Informe, **Panamá** mantiene una postura más distante respecto al SICA en los últimos años, enfocando su política exterior regional en temas económicos y logísticos. Aunque participa en espacios puntuales, su involucramiento ha sido limitado en áreas como gobernanza democrática, integración política y cooperación ambiental. Como país clave para la conectividad continental y la economía regional, su baja articulación limita el potencial del sistema regional para abordar temas como el narcotráfico transnacional, la gestión de desastres y la coordinación migratoria. Una mayor vinculación estratégica podría posicionar a Panamá como un actor de equilibrio y dinamismo dentro del proceso de integración.

El Informe indica que **Costa Rica** ha mantenido un compromiso institucional con el proceso de integración regional y ha participado de forma constante en las instancias del SICA. No obstante, también ha sido crítica respecto al funcionamiento del sistema, en especial en temas de eficiencia, transparencia y uso de los recursos. Esta postura, aunque constructiva, ha influido en su disposición a asumir mayores compromisos financieros o políticos dentro del sistema. Como país con tradición democrática consolidada y referente en temas ambientales, Costa Rica tiene el potencial de liderar esfuerzos renovados de integración. Sin embargo, el actual debilitamiento del SICA limita el impacto de su liderazgo y restringe las posibilidades de avanzar hacia una agenda regional más ambiciosa y efectiva.

El Informe también advierte que los efectos del cambio climático intensifican la necesidad de una cooperación regional sólida. Sequías prolongadas, lluvias extremas, inundaciones y pérdida de biodiversidad no reconocen fronteras. Sin planificación conjunta, los países enfrentan estos impactos con recursos desiguales y sin posibilidad de compartir experiencias, herramientas o fondos de respuesta. La fragmentación institucional, en este contexto, se vuelve una vulnerabilidad adicional.

El llamado del Informe es claro: revitalizar el proceso de integración regional no es una opción, sino una condición indispensable para asegurar el bienestar, la sostenibilidad y la seguridad en la región. Se requiere más que voluntad: hacen falta compromisos vinculantes, planes comunes y mecanismos de rendición de cuentas para que la integración no sea solo un discurso, sino una política activa y verificable. También es clave involucrar a nuevos liderazgos, especialmente de la juventud y la sociedad civil organizada, quienes han mostrado un compromiso creciente con la justicia climática, la transparencia y los derechos humanos.

*“Recuperar el proceso de integración es fundamental para proteger a las personas, fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar un desarrollo sostenible para Centroamérica y República Dominicana”,* expresó Alberto Mora, coordinador del Informe.

Aunque el panorama es complejo, el Informe también identifica una base técnica y ciudadana que aún apuesta por la cooperación regional. Las universidades, sectores productivos, organismos multilaterales y comunidades organizadas han mantenido espacios de articulación e intercambio que demuestran que una integración efectiva no solo es deseable, sino posible. Recuperar el liderazgo político y conectar estas capacidades puede marcar el inicio de una nueva etapa para el SICA, más centrada en resultados y en las personas. La historia regional demuestra que, cuando hay decisión política y sentido de propósito compartido, la integración puede generar soluciones reales y duraderas.

El Informe completo está disponible para descarga en: <https://hdl.handle.net/20.500.12337/10176>